



Domingo 19 de Abril de 2026

Crónica



Las declaraciones del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, dejaron en evidencia una de las principales fragilidades del discurso oficial: las expulsiones de ciudadanos venezolanos con orden vigente no podrán ejecutarse mientras no exista recepción desde su país de origen.

El primer vuelo de expulsión concretado por el Gobierno esta semana buscó instalar una señal de control migratorio y cumplimiento de promesas de campaña. Sin embargo, la propia ejecución del operativo expuso una contradicción mayor: entre los 40 expulsados no hubo ciudadanos venezolanos, pese a que ese grupo concentra la mayor parte de las órdenes pendientes. La explicación no vino de la oposición ni de expertos externos, sino del propio director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien reconoció públicamente que los venezolanos expulsados no pueden ser enviados de vuelta porque Venezuela no los recibe en esa condición.

En conversación con Canal 24 Horas, Sauerbaum fue explícito: "no se pueden enviar los irregulares venezolanos que estén expulsados, porque Venezuela no los

Gobierno admite límite clave en su plan migratorio: no puede expulsar a venezolanos si Caracas no los recibe



EXPULSADOS: 19 COLOMBIANOS, 17 BOLIVIANOS Y 4 ECUATORIANOS | NOTICIAS 24

recibe". Añadió además que esas personas solo podrán ser expulsadas "cuando tengamos la facilidad de poder recibirlos", mientras el servicio opta por "invitarlos a salir" del país. El punto es políticamente delicado, porque transforma una promesa de firmeza en una realidad mucho más restringida: el Estado chileno puede decretar expulsiones, pero no necesariamente ejecutarlas cuando depende de la aceptación del país de destino.

La admisión no es menor. Durante semanas,

el Ejecutivo instaló la idea de que abril marcaría el inicio de una nueva etapa en materia migratoria, con vuelos periódicos y una política de mayor dureza. Pero el propio Servicio Nacional de Migraciones ya había reconocido a fines de marzo que existen más de 46 mil expulsiones pendientes de ejecutar, una cifra que da cuenta del tamaño del problema y de la brecha entre anuncio y resultado. A eso se suma otro obstáculo relevante: la falta de relaciones consulares fluidas con Venezuela, factor que el mismo Gobierno identifica como uno de los principales

impedimentos para concretar retornos forzados.

El problema, por tanto, no parece ser solo operativo, sino también político y diplomático. La Moneda logró mostrar el despegue de un primer vuelo de expulsión, pero al mismo tiempo quedó claro que el caso más complejo y voluminoso sigue sin solución efectiva. La Tercera reportó que el primer operativo excluyó a venezolanos precisamente porque el congelamiento de relaciones con Caracas impide avanzar en coordinaciones consulares decisivas. En la práctica, eso significa que la nacionalidad que más pesa dentro del universo de expulsiones pendientes es, a la vez, la más difícil de procesar.

Desde el propio oficialismo se ha intentado complementar esa dificultad con otra vía: la salida voluntaria. Sauerbaum señaló que Venezuela sí recibe a personas que deciden regresar por su cuenta o eventualmente en un vuelo humanitario. De hecho, reportes recientes indican que el Ejecutivo está enfatizando esas salidas como mecanismo alternativo, en momentos en que las expulsiones forzadas encuentran un muro diplomático. Pero ese giro también abre una pregunta incómoda: si el Gobierno termina dependiendo más de la "invitación a salir" que de la expulsión efectiva, entonces el corazón de su narrativa de control migratorio pierde parte importante de su fuerza real.

El trasfondo revela una tensión que en el norte del país se observa con especial atención. Regiones como Tarapacá han vivido durante años el impacto de la migración irregular, el desborde fronterizo y la presión

sobre servicios públicos y seguridad. Por eso, cuando desde Santiago se anuncian planes duros o medidas de choque, la expectativa ciudadana no se mide por la retórica, sino por la capacidad concreta de ejecución. Y hoy esa capacidad aparece condicionada por una verdad incómoda: sin coordinación internacional, sin recepción del país de origen y sin condiciones diplomáticas mínimas, la expulsión deja de ser una potestad plenamente soberana y pasa a depender de factores externos que el Gobierno no controla del todo.

En ese escenario, las declaraciones de Sauerbaum no solo sinceran una dificultad técnica. También exponen una grieta política. Porque una cosa es prometer mano firme frente a la migración irregular, y otra muy distinta es reconocer, ya en ejercicio del poder, que los casos más numerosos no pueden resolverse de inmediato porque el país receptor simplemente no abre la puerta. La distancia entre ambas cosas es la que hoy comienza a tensionar el discurso oficial.

El desafío ahora será ver si el Ejecutivo logra transformar esa limitación en una estrategia creíble o si, por el contrario, la ciudadanía termina constatando que el plan migratorio prometido era más eficaz como consigna de campaña que como política pública plenamente aplicable. Por ahora, lo único claro es que el Gobierno ya reconoció que no expulsará a migrantes venezolanos con orden vigente mientras Venezuela no los reciba, y esa admisión reordena por completo el debate sobre alcance, viabilidad y resultados de su ofensiva migratoria.e